

TEMA 2. RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL: CLASES DE ENTIDADES LOCALES. ORGANIZACIÓN PROVINCIAL Y COMPETENCIAS DE LAS PROVINCIAS. LEY 3/1983, DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE GALICIA Y ORDENANZA DE USO DE LA LENGUA GALLEGA EN LA DIPUTACIÓN DE CORUÑA (BOP 186, del 29 de septiembre de 2017). USO OFICIAL DEL GALLEGO.

1. RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL: CLASES DE ENTIDADES LOCALES

Podemos definir Régimen local como el conjunto de principios, normas e instituciones que garantizan la existencia de las Entidades Locales y regulan su funcionamiento.

El Régimen local es el **ordenamiento regulador de la Administración Local**, que en aras de garantizar su autonomía abarca tanto su organización como su funcionamiento, competencias, actividad y medios personales y materiales.

1.1. Características

La Administración Local, configurada de conformidad con el actual Régimen local español, presenta así las siguientes características:

- a) Forma parte de la Administración Pública.
- b) Tiene carácter territorial, el territorio es un elemento fundamental.
- c) Tiene autonomía.
- d) Está formada por entes, no por órganos.

1.2. Normas constitucionales específicas de la Administración Local

— **Artículo 137 (autonomía).** *“El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.*

Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

Se establece como novedad en nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento de las Comunidades Autónomas, al que se destina el Capítulo III del Título VIII.

— **Artículo 138 (solidaridad).** *“El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art. 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.”*

En relación con este precepto dispone el art. 158.2 de la Constitución que: “con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso”.

— **Artículo 139 (igualdad de derechos y obligaciones).** “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que, directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”.

Capítulo II: De la Administración Local

— **Artículo 140 (autonomía municipal).** “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.

Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley, los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del Concejo Abierto”.

Consagra este precepto la autonomía municipal y la democratización de los órganos de gobierno municipales.

— **Artículo 141 (autonomía provincial).** “La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial, para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

En los archipiélagos, las islas tendrán, además, su administración propia en forma de Cabildo o Consejos”.

Este precepto configura a la provincia con un doble carácter:

- Ente local (con autonomía para la gestión de sus intereses).
- Y órgano periférico para el cumplimiento de los fines del Estado en la “provincia” (dependiendo, por tanto, de la esfera central).

Reconoce de forma implícita las mancomunidades y agrupaciones de municipios y permite las formas de administración de las propias de las islas.

— **Artículo 142 (suficiencia de recursos económicos).** “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

Se establece en este precepto la necesidad del reforzamiento de las Haciendas locales con el objeto de que Entes locales puedan llevar a cabo eficazmente sus competencias.

El artículo 142 está relacionado con el art. 133, que después de señalar que: “La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”, añade, no obstante, que: “las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

1.3. Clases de entidades locales

El artículo 3 de la LRBRL, en su apartado primero, establece que son **entidades territoriales**: el municipio, la provincia y la isla, en los archipiélagos balear y canario. Y en su apartado segundo enumera las “**otras entidades locales**” en los siguientes términos:

“Gozan, asimismo, de la condición de Entidades locales:

- a) Las Comarcas u otras Entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
- b) Las Áreas Metropolitanas.
- c) Las Mancomunidades de municipios”.

La LRBRL (y por tanto el legislador estatal) ha querido que sea el legislador autonómico el que establezca, en primer término, el reconocimiento de esas “otras entidades locales” y, en segundo término, el alcance de su territorialidad y de su autonomía.

Por ello, serán las **leyes de las Comunidades Autónomas que instituyan a las Comarcas, Áreas Metropolitanas y otras Agrupaciones de municipios** distintas de la provincia, las que determinarán el ámbito de su autonomía y concretarán cuáles de aquellas potestades del artículo 4 de la LRBRL les serán de aplicación (potestades reglamentaria y de autoorganización, tributaria y financiera, expropiatoria, sancionadora, etc.).

1.3.1. Municipio

Los Municipios son Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

El Municipio es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Son elementos del Municipio; el territorio, la población y la organización.

1.3.2. Las Comarcas

Según establece el art. 42 de la LRBRL:

“Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras Entidades que agrupen varios municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demande la prestación de servicios de dicho ámbito.

La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los propios municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la Comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.”

1.3.3. Las Mancomunidades de Municipios

Podemos definir las Mancomunidades municipales como “asociaciones de municipios para el establecimiento y desarrollo de obras, servicios y otros fines propios, sin que sea necesario que pertenezcan a la misma provincia ni exista entre ellas continuidad territorial, salvo que sea requerida para los fines de la asociación”.

“Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia”.

Las Mancomunidades se caracterizan porque:

- Son entidades municipales (puesto que están integradas por municipios).
- Son entes institucionales, pues tienen como finalidad realizar o conseguir una serie de objetivos comunes.
- Son de carácter voluntario, a diferencia de la Comarca o de las Áreas Metropolitanas.
- Son especialmente aptas para las exigencias de los modernos servicios públicos.

1.3.4. Las Áreas Metropolitanas

Las Áreas Metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas en cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.

La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los municipios integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.

1.3.5. Entidades locales de ámbito inframunicipal

La ley de Bases de Régimen local introduce un nuevo art. 24 bis en el articulado que da una nueva regulación a las entidades de ámbito inferior al Municipio:

“1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.

2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.

3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”

2. ORGANIZACIÓN PROVINCIAL Y COMPETENCIAS DE LAS PROVINCIAS

2.1. Concepto

La provincia, en el sentido en que aquí la contemplamos, puede ser definida como un ente local cuya jurisdicción se extiende sobre el territorio de un conjunto de municipios, delimitados conforme a la división general del territorio nacional para la prestación de los servicios estatales.

De la definición propuesta se desprenden las siguientes notas:

1. La provincia es un **ente local**, es decir, un ente público menor de carácter territorial, por lo que participa de las peculiaridades de esta clase de entes, que estudiamos al tratar el municipio.
2. A diferencia, sin embargo, de éste, no tiene carácter básico, sino que constituye un **sujeto intermedio** entre el municipio y las Comunidades Autónomas o el Estado.
No obstante, sí es un ente de existencia necesaria de acuerdo con el art. 137 CE.
3. Por tanto, tampoco puede decirse que sea, como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, un ente derivado o desconcentrado de éste, toda vez que es superior -en extensión- a éste y tiene **“personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”** (art. 31.1 LRBRL).
4. Se distingue de la isla en los casos en que ésta es ente local, porque los municipios sobre los que extiende su jurisdicción vienen delimitados con arreglo a la división general del territorio nacional para la prestación de los servicios estatales, mientras que la jurisdicción de la isla se proyecta tan sólo sobre los municipios en ella comprendidos.

2.2. Los elementos de la provincia: el territorio, la población y la organización provincial

2.2.1. El territorio

El territorio de la provincia es el propio de los municipios que en ella se comprenden. Su alteración sólo podrá acordarse por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2.2.2. La población

La legislación local guarda silencio sobre la población provincial, por lo que debe entenderse que estará integrada por la de los municipios comprendidos en la provincia.

2.2.3. La organización provincial

La LRBRL en su art. 32 establece una serie de reglas para la organización provincial:

a) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.

b) Asimismo existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno.

Aunque la modificación de la LRBRL no lo manifiesta expresamente, interpretamos que este apartado está referido a la Comisión informativa, órgano que antes de la reforma era complementario y que ahora se ha convertido en necesario de todas las Diputaciones siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito.

c) El resto de los órganos complementarios de las anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante, las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local pondrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal.

2.3. Competencias de las provincias

En el **art. 36 LRBRL** se recogen las **competencias propias de la Diputación**. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:

- a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el art. 31.2.a) LRBRL.
- b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.
- c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.
En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.
- d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
- e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el art. 116 bis.
- f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
- g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
- h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes.
- i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes.

A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c), la Diputación o entidad equivalente:

a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el art. 59 LRBRL.

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos.

El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios.

b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la provincia mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal.

Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos.

c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.

d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.

2.4. Órganos de las provincias

2.4.1. El Presidente de la Diputación provincial

Órgano activo y unipersonal con facultades propias y diferenciado de los restantes de la Corporación que preside y respecto de la cual asume la representación.

A) Constitución de la Diputación provincial

La sesión constitutiva de las Diputaciones provinciales se celebrará en el quinto día posterior a la proclamación de los Diputados electos, a las doce horas, en la sede de dichas Corporaciones, previa entrega de las credenciales respectivas al Secretario de la Corporación.

Si en la hora y fecha señaladas para celebrar la sesión constitutiva de las Diputaciones provinciales concurriese a la misma un número inferior a la mayoría absoluta de Diputados electos, éstos se entenderán convocados automáticamente para celebrar la sesión constitutiva dos días después, que habrá de celebrarse en el mismo local y a la misma hora. En dicha sesión la Corporación se constituirá, cualquiera que fuere el número de Diputados que concurriesen.

La sesión constitutiva, a la hora señalada a este objeto, se presidirá por una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el acto y actuando de Secretario el que lo sea de la Corporación.

La Mesa comprobará las credenciales presentadas o acreditaciones de personalidad de los electos, con base a las certificaciones que hubiere remitido la Junta Electoral de Zona, y declarará constituida la Corporación. Acto seguido se procederá a elegir al Presidente de entre sus miembros, con arreglo a lo dispuesto en la legislación electoral.

B) Elección

Para la elección del Presidente, el candidato debe obtener mayoría absoluta en primera votación y simple en la segunda.

El Presidente tomará posesión ante el Pleno de la Corporación, de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos.

C) Destitución

El Presidente de la Diputación podrá ser destituido de su cargo mediante moción de censura suscrita por la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación y adoptada por el Pleno con mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

La Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril, de modificación de la LOREG, introduce una novedad, estableciendo que el Presidente de la Diputación podrá cesar mediante la pérdida de una cuestión de confianza por él planteada ante el Pleno de la Corporación, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:

- a. Los presupuestos anuales.
- b. El reglamento orgánico.
- c. El plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

En caso de no obtenerse la confianza, el nuevo Presidente se elegirá de acuerdo con el sistema previsto en el art. 197 bis de la LOREG para los Alcaldes de municipios de más de 250 habitantes.

D) Renuncia

El Presidente podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de Diputado.

La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Diputación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes.

En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral.

E) Duración del mandato

El mandato de los miembros de la Diputación es de cuatro años, contados **s a** partir de la fecha de la elección.

F) Atribuciones

Según el art. 34 de la LRBRL, corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación:

a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.

b) Representar a la Diputación.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación provincial.

e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación.

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el art. 177.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL.

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el art. 99.1 y 3 de la LRBRL.

Además el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, le atribuye en particular en esta materia:

- Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformidad con las bases aprobadas por el Pleno de la Corporación, y nombrar funcionarios de carrera de la Corporación, a propuesta del Tribunal, a los que superen las correspondientes pruebas.
- Resolver las convocatorias para la provisión de los puestos de trabajo de libre designación.
- Contratar y despedir al personal laboral de la Corporación y asignar al mismo a los distintos puestos de carácter laboral previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo con la legislación laboral.
- Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la legislación vigente.
- Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventivamente a toda clase de personal.
- Premiar y sancionar a todo el personal de la Corporación, salvo que la sanción consista en la separación del servicio o el despido del personal laboral.
- La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación de todo el personal.
- La asignación individualizada del complemento de productividad y de las gratificaciones, conforme a las normas estatales reguladoras de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales.

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente.

l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación.

ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes.

o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los apartados a), i) y j) anteriores.

Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes.

2.4.2. Los Vicepresidentes

Órganos encargados, fundamentalmente, de la sustitución del Presidente.

Los Vicepresidentes serán libremente nombrados y cesados por el Presidente de entre los miembros de la Junta de Gobierno.

Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Presidente, de la que dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, o se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma de la resolución por el Presidente, si en ella no se dispone otra cosa.

La condición de Vicepresidente se pierde, además de por el cese, por la renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno.

2.4.3. El Pleno de la Diputación

Órgano de orden público, gestor de los intereses **económico-administrativos** de su competencia, con jurisdicción sobre la totalidad del territorio provincial.

- **Composición**

El Pleno de la Diputación se constituye por el Presidente y los Diputados (art. 33), y es presidido por el primero.

- **Elección de Diputados**

Se encuentra regulada en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Se determina, según el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo:

- Hasta 500.000 residentes: 25 Diputados.
- De 500.001 a 1.000.000: 27 Diputados.
- De 1.000.001 a 3.500.000: 31 Diputados.
- De 3.500.001 en adelante: 51 Diputados.

A) Distribución territorial

Las Juntas Electorales provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones, atendiendo a la siguiente regla:

- Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con un Diputado.
- Ningún partido judicial puede contar con más de tres quintos del número total de Diputados provinciales.
- Las fracciones iguales o superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional se corrigen por exceso y las inferiores por defecto.
- Si como consecuencia de las operaciones anteriores resultase un número total que no coincida, por exceso, con el número de Diputados correspondientes a la provincia, se sustraen los puestos necesarios a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea menor. Si, por el contrario, el número no coincide por defecto, se añaden puestos a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea mayor.

B) Elección interna de Diputados

Realizada la asignación de puestos de Diputados, conforme a los apartados anteriores, la Junta Electoral convocará por separado, dentro de los cinco días siguientes, a los Concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obtenido puestos de Diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos Concejales a quienes hayan de ser proclamados Diputados, eligiendo además tres suplentes para cubrir por su orden las eventuales vacantes.

Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama los Diputados electos y los suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta provincial y a la Diputación certificaciones de los Diputados electos en el partido judicial.

C) Duración del mandato

La duración del mandato de los Diputados provinciales será de cuatro años.

• Atribuciones

Corresponde en todo caso al **Pleno**:

- a) La organización de la Diputación.
- b) La aprobación de ordenanzas.
- c) La aprobación y modificación de los presupuestos, la disposición de los gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- d) La aprobación de los planes de carácter provincial.
- e) El control y la fiscalización de la gestión de los órganos de gobierno.

- f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
- g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
- h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y demás Administraciones Públicas.
- i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.
- j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación.
- k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL.
- l) **Letra derogada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (actualmente, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).**
- m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.
- n) **Letra derogada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (hoy, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).**
- ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.
- o) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes.

Pertenece igualmente al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que se rige por lo dispuesto en la legislación electoral general.

2.4.4. La Junta de Gobierno

- **Composición**

La Junta de Gobierno se integra por el Presidente, que la preside, y los Diputados nombrados y separados libremente por él, dando cuenta al Pleno.

El número de Diputados a los que el Presidente puede nombrar miembros de la Junta de Gobierno **NO** podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.

A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el número total de Diputados.

El Presidente puede cesar libremente, en todo momento, a cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

- **Atribuciones**

Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno la asistencia permanente del Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. A tal fin, la Junta de Gobierno será informada de todas las decisiones del Presidente. Esta información tendrá carácter previo a la adopción de la decisión, siempre que la importancia así lo requiera.

Asimismo, la Junta de Gobierno ejercerá las atribuciones que le delegue el Presidente, y también aquellas atribuciones que le asignen las leyes.

- **Constitución**

Se realiza durante los diez días siguientes a aquel, en que el Presidente haya designado a los miembros que la constituyen. Celebra reunión ordinaria cada quince días, si no se ha dispuesto otra cosa.

Para la válida constitución de la formación de la Junta de Gobierno se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no hay quórum suficiente se efectuará una segunda convocatoria una hora después de la señalada para la primera convocatoria.

En este caso, hasta con la asistencia de la mitad de sus miembros, siempre que su número no sea inferior a tres.

2.4.5. Comisiones Informativas

- **Concepto**

Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el **estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno**, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.

- **Clases**

Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales.

- **Composición**

El Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la presidencia efectiva podrá delegar en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.

Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.

- **Dictámenes**

Los dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante.

- **Órganos complementarios**

Se consideran órganos complementarios, según lo dispuesto en el art. 119 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales a:

- Los Diputados delegados.
- La Comisión Especial de Cuentas.
- Los Consejos sectoriales.
- Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios.

El art. 119 del ROFEL incluye, además, entre los órganos complementarios, a las Comisiones Informativas; no obstante hay que tener en cuenta que tras la modificación de la LRBRL efectuada por la Ley 11/1999, las Comisiones Informativas pasan a ser consideradas órganos necesarios.

3. LEY 3/1983 DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE GALICIA.

La Constitución de 1978, al reconocer nuestros derechos autonómicos como nacionalidad histórica, hizo posible la puesta en marcha de un esfuerzo constructivo encaminado a la plena recuperación de nuestra personalidad colectiva y de su potencialidad creadora.

Uno de los factores fundamentales de esa recuperación es la lengua, por ser el núcleo vital de nuestra identidad.

La presente Ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución y en el 5 del Estatuto de Autonomía garantiza la igualdad del gallego y del castellano como lenguas oficiales de Galicia y asegura la normalización del gallego como lengua propia de nuestro pueblo.

3.1. De los derechos lingüísticos en Galicia

- El gallego es la lengua propia de Galicia.
- Todos los gallegos tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo.
- Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal del gallego y del castellano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.
- Los poderes públicos de Galicia adoptarán las medidas oportunas para que nadie sea discriminado por razón de lengua.
- Los ciudadanos podrán dirigirse a los jueces y tribunales para obtener la protección judicial del derecho a emplear su lengua.

3.2. Uso oficial del gallego

El gallego, como lengua propia de Galicia, **es lengua oficial de las instituciones de la Comunidad Autónoma, de su Administración, de la Administración Local y de las Entidades Públicas dependientes de la Comunidad Autónoma. También lo es el castellano como lengua oficial del Estado.**

Las leyes de Galicia, los Decretos legislativos, las disposiciones normativas y las resoluciones oficiales de la Administración Pública gallega se publicarán en gallego y castellano en el Diario Oficial de Galicia.

Los ciudadanos tienen derecho al uso del gallego, oralmente y por escrito, en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. **Las actuaciones administrativas en Galicia serán válidas y producirán sus efectos cualquiera que sea la lengua oficial empleada.**

Los poderes públicos de Galicia promoverán el uso normal de la lengua gallega, oralmente y por escrito, en sus relaciones con los ciudadanos.

La Xunta dictará las disposiciones necesarias para la normalización progresiva del uso del gallego. Las Corporaciones Locales deberán hacerlo de acuerdo con las normas recogidas en esta Ley.

En el ámbito territorial de Galicia, los ciudadanos podrán utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las relaciones con la Administración de Justicia.

Las actuaciones judiciales en Galicia serán válidas y producirán sus efectos cualquiera que sea la lengua oficial empleada. En todo caso, la parte o interesado tendrá derecho a que se le entere o notifique en la lengua oficial que elija.

La Xunta de Galicia promoverá, de acuerdo con los órganos correspondientes, la progresiva normalización del uso del gallego en la Administración de Justicia.

Los documentos públicos otorgados en Galicia se podrán redactar en gallego o castellano. De no haber acuerdo entre las partes, se emplearán ambas lenguas.

En los Registros Públicos dependientes de la Administración autonómica, los asentamientos se harán en la lengua oficial en que esté redactado el documento o se haga la manifestación. Si el documento es bilingüe, se inscribirá en la lengua que indique quien lo presenta en el Registro. En los Registros Públicos no dependientes de la Comunidad Autónoma, la Xunta de Galicia promoverá, de acuerdo con los órganos competentes, el uso normal del gallego.

Las certificaciones literales se expedirán en la lengua en la que se efectuase la inscripción reproducida. Cuando no sea transcripción literal del asentamiento, se empleará la lengua oficial interesada por el solicitante. En el caso de documentos inscritos en doble versión lingüística se pueden obtener certificaciones en cualquiera de las versiones, a voluntad del solicitante.

Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega.

Corresponde a la Xunta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia. El **nombre de las vías urbanas** será **determinado por el Ayuntamiento correspondiente**. Estas denominaciones son las legales a todos los efectos y la rotulación tendrá que concordar con ellas. La Xunta de Galicia reglamentará la normalización de la rotulación pública respetando en todos los casos las normas internacionales que suscriba el Estado.

A fin de hacer efectivos los derechos reconocidos en la norma, los poderes autonómicos promoverán la progresiva capacitación en el uso del gallego del personal afecto a la Administración Pública y a las empresas de carácter público en Galicia.

En las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la Administración Autónoma y Local se considerará, entre otros méritos, el grado de conocimiento de las lenguas oficiales, que se ponderará para cada nivel profesional.

3.3. Uso del gallego en la enseñanza

El gallego, como lengua propia de Galicia, es también **lengua oficial en la enseñanza en todos los niveles educativos**.

Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna.

Las Autoridades educativas de la Comunidad Autónoma arbitrarán las medidas encaminadas a promover el uso progresivo del gallego en la enseñanza.

La lengua gallega es **materia de estudio obligatorio en todos los niveles educativos no universitarios**.

Se garantizará el uso efectivo de este derecho en todos los centros públicos y privados.

3.4. Uso del gallego en los medios de comunicación

El gallego será la **lengua usual en las emisoras de radio y televisión** y en los demás medios de comunicación social sometidos a gestión o competencia de las instituciones de la Comunidad Autónoma.

3.5. El uso del gallego y la administración autonómica

El Gobierno Gallego asumirá la dirección técnica y el seguimiento del proceso de normalización de la lengua gallega; asesorará a la Administración y a los particulares, y coordinará los servicios encaminados a conseguir los objetivos de la presente Ley.

La Escuela Gallega de Administración Pública se encargará de la formación de los funcionarios a fin de que puedan usar el gallego en los términos establecidos por la norma.

El dominio de las lenguas gallega y castellana será condición necesaria para obtener el diploma de la Escuela Gallega de Administración Pública.

El Gobierno Gallego y las Corporaciones Locales dentro de su ámbito fomentarán la normalización del uso del gallego en las actividades mercantiles, publicitarias, culturales, asociativas, deportivas y otras actividades.

4. ORDENANZA DO USO DA LINGUA GALEGA NA DEPUTACION DA CORUÑA

O **galego** como lingua propia e oficial de Galicia, **é idioma oficial da Deputación Provincial da Coruña**.

A Deputación da Coruña empregará o galego en todas as súas accións, nas súas actuacións administrativas, na documentación, na comunicación social e nas relación coas cidadás, cos cidadáns e con todas as entidades situadas en Galicia e con aquelas outras que admitan o galego para as actuacións administrativas.

A cidadanía, nas súas relacións coa Deputación provincial e cos seus organismos, entidades e empresas dependentes aos que se refire o artigo seguinte empregarán a lingua que elixan conforme ao disposto no ordenamento xurídico.

Cando no seo dun procedemento administrativo cunha pluralidade de interesados/as se dea contradición entre estes respecto da lingua a empregar, o uso da lingua a empregar axustarase ao previsto na lexislación autonómica de Galicia.

A Deputación da Coruña e os organismos que dela dependen ou poidan depender no futuro –entes asociados, padroados, organismos autónomos, sociedades, fundacións, centros de formación, museos, arquivos, bibliotecas etc. – rexeranse polos criterios establecidos nesta ordenanza.

Tamén se rexerán polos criterios desta ordenanza as empresas adxudicatarias, concesionarias ou contratas cando actúan en función desa adxudicación, concesión ou contrato, así como as de explotación mixta, o cal se fará constar explicitamente nos documentos que correspondan (concursos públicos, pregos de cláusulas, contratos etc.)

A Deputación Provincial da Coruña velará para que nas actividades, organismos, etc. en que participe e /ou teña representación, sexan aplicados os principios desta ordenanza.

Todos os servizos, departamentos, oficinas e organismos dependentes da Deputación terán en conta a necesidade da normalización da lingua galega en todos os ámbitos sociais, polo que asumirán o desenvolvemento desta ordenanza en todas e cada unha das accións do seu funcionamento cotián.

Atención ao público

Todos os servizos de todas as unidades administrativas que teñan relación co público fomentarán o uso do idioma galego mediante a súa utilización como lingua normal de comunicación de entrada, tanto oral como escrita, practicando a oferta positiva en lingua galega.

A atención ao público mediante mecanismos automáticos, tales como contestadores de teléfonos ou outros medios telefónicos ou informáticos, usarán por defecto e de entrada o galego, e así se especificará cando sexan comprados, contratados e/ou programados.

O disposto no presente artigo tamén é de aplicación para as empresas ou entidades que presten servizos á Deputación por concesión, arrendamento, concerto ou contrato.

Documentación e actuación administrativa

Como criterio xeral, todas as actuacións da Deputación faranse en idioma galego. Isto sen prexuízo de que, cando legalmente sexa requisito, ademais de en galego tamén se fagan noutra(s) lingua(s).

Será redactada en lingua galega, cando menos, a seguinte documentación administrativa:

- a) As convocatorias de sesións de todos os órganos da Deputación Provincial da Coruña, así como as ordes do día, mocións, votos particulares, propostas de acordo, ditames das comisións informativas, rogos, preguntas e as actas dos citados órganos provinciais.
- b) As resolucións de todos os órganos provinciais.
- c) Toda a documentación xerada pola Deputación que forme parte dos expedientes administrativos que teñan que someterse á decisión ou coñecemento dos devanditos órganos.
- d) As actas e acordos de todos os órganos dos consellos e entidades con personalidade xurídica dependentes desta Deputación.
- e) As notificacións, recursos, escrituras públicas e, en xeral, todos os actos de carácter público ou administrativos que se realicen por escrito en nome da Deputación Provincial da Coruña ou dos organismos que dela dependen e que teñan efecto no territorio da comunidade autónoma.

Todos os modelos de documentación da Deputación Provincial da Coruña serán elaborados e difundidos de entrada e prioritariamente en galego e, verbo disto, nos plans e procesos de informatización e racionalización administrativa deberase ter presente o establecido neste artigo, sen que isto signifique que en casos específicos non se poida incorporar tamén a outra lingua oficial para cando unha persoa o poida requirir expresamente.

Nos procedementos iniciados a solicitude dos interesados/as, os cidadáns/ás teñen dereito a elixir a lingua na que se dirixen á Deputación provincial e a solicitar desta que as comunicacións, notificacións e demais documentos que se lles dirixan se redacten en castelán.

Sen prexuízo do que para os rexistros públicos establece o artigo 9 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística de Galicia, nos rexistros administrativos das oficinas da Deputación Provincial da Coruña e dos seus organismos dependentes os asentos faranse en galego, independentemente da lingua na que estean escritos.

Publicacións, accións informativas, formativas e actividades públicas

Os anuncios oficiais da Corporación que se publiquen no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no Diario Oficial de Galicia serán redactados e publicados en galego. Sucederá o mesmo cos anuncios propios de calquera procedemento administrativo que sexan publicados en calquera outro medio. Cando legalmente sexa requisito, redactaranse tamén noutra(s) lingua (s) achegando unha tradución do orixinal en lingua galega.

As publicacións editadas na Imprenta da Deputación da Coruña, en papel ou dixitais, con carácter xeral, realizaranse en lingua galega, sen prexuízo de que poidan conter traducións noutras linguas cando o público obxectivo da edición poida situarse en comunidades fóra da área lingüística galega.

Ás publicacións editadas por outras entidades públicas ou privadas nas que colabore a Deputación Provincial da Coruña e teñan difusión en Galicia, aplicaráselles os mesmos criterios definidos no punto anterior.

Deberase facer referencia explícita a este requisito nos acordos de colaboración, convocatorias de subvencións e contratos que se leven a cabo.

As campañas publicitarias da Deputación da Coruña e de promoción de todas as actividades organizadas faranse, sexa no soporte que sexa, en galego, cando estas produzan efecto no territorio da comunidade autónoma.

Na contratación de publicidade, a Deputación terá en conta os medios de comunicación en distintos soportes que usan o galego.

As campañas publicitarias e de promoción de actividades (cursos, xornadas, conferencias, festas, espectáculos, actividades deportivas, festivais, campionatos etc.) doutras entidades nas que dalgún xeito colabore a Deputación provincial faranse en galego en calquera soporte.

Para lle dar cumprimento a isto, cando os haxa, nos acordos de colaboración, convocatorias de subvencións, contratos etc. farase referencia a este requisito.

A publicidade que se difunda en instalacións e mecanismos cuxo titular sexa a Deputación Provincial da Coruña deberá ser redactada en galego.

Todo o anterior sen prexuízo de que, puntualmente, tamén se poidan facer noutras linguas cando o público obxectivo da acción publicitaria pertenza a outras comunidades fóra da área lingüística galega.

As accións formativas organizadas pola Deputación Provincial da Coruña desenvolveranse principalmente en lingua galega.. A formación puntual e actividade xeral ofertada regularmente pola Deputación nos seus centros ou organismos dependentes desenvolveraa utilizando normalmente o galego como lingua de comunicación. O establecido neste punto terase en conta e farase referencia ao seu contido en casos como:

- a) Na contratación de persoal para os distintos centros.
- b) Na organización de actividades nos distintos centros.
- c) Na contratación de empresas.
- d) Nos regulamentos ou estatutos dos distintos centros e organismos, se os houber.

Para que a Deputación Provincial da Coruña colabore en accións informativas ou formativas organizadas por outras entidades será requisito que estas se desenvolvan, en xeral, en lingua galega.

Este requisito transmitiráselle á entidade ou entidades organizadoras e explicitarase nos acordos de colaboración, convocatorias de subvencións, contratos, etc.

As persoas integrantes da Corporación provincial expresaranse en galego nos actos que teñan lugar no ámbito lingüístico galego, nos que interveñan representando a Deputación en virtude de delegación.

Todas aquelas actividades comunicativas, culturais, deportivas, divulgativas etc. (eventos, conferencias, intervencións públicas, xornadas, congresos, charlas, campionatos, competicións, probas, espectáculos, festivais, etc.) organizadas pola Deputación da Coruña desenvolverase, en xeral, en lingua galega.

Para que a Deputación Provincial da Coruña colabore en actividades comunicativas, culturais, deportivas, divulgativas, etc. (xornadas, congresos, charlas, campionatos, competicións, probas, espectáculos, festivais etc.) organizadas por outras entidades valorarase especialmente que estas se desenvolvan en lingua galega. Isto seralle transmitido á entidade ou entidades organizadoras coas que se colabora e explicitarase nos acordos de colaboración, contratos ou convocatorias.

A Unidade Técnica de Normalización Lingüística (UTNL) revisará os textos que vaian ser difundidos pola Deputación da Coruña en calquera soporte: diarios oficiais, xornais, revistas, carteis, folletos e outros que se consideren relevantes.

Compra de bens e materiais, encargo e contratación de servizos e relacións coas empresas privadas

Para a contratación da prestación de servizos da Deputación provincial en calquera das categorías establecidas legalmente, especificarase de xeito explícito que estes deben ser prestados en galego, agás nos casos en que, pola natureza do servizo deban prestarse, tamén, noutra lingua, e para a súa prestación poderanse establecer criterios sobre os aspectos contidos no punto 1 deste artigo que se especificarán e concrearán –cando sexa preciso- nos correspondentes contratos, acordos, pregos, encargos ou comunicacións.

Os contratistas disporán, cando así o soliciten, dos pregos de condicións e de prescricións técnicas en castelán.

O establecido neste artigo en ningún caso poderá ser causa de exclusión dos licitadores nos procesos de contratación.

Os documentos públicos ou contractuais subscritos pola Deputación con empresas privadas, particulares ou persoas xurídicas serán redactados en galego. Se a súa finalidade o esixe, poderá facerse tamén copia traducida a outra (s) lingua (s), na (s) que constará que é tradución do seu orixinal en galego.

Os estudos, proxectos, informes, documentos e traballos análogos resultantes dunha relación contractual entre a Deputación Provincial da Coruña e unha persoa física ou xurídica privada serán redactados e entregados en galego. Este requirimento farase explícito nas convocatorias, pregos de condicións ou solicitudes de tales traballos.

A Deputación propondrá e animará e, cando fose preciso, facilitará axuda ás empresas contratantes e proveedoras para que usen o galego na súa documentación e comunicación e farase explícito nos correspondentes pregos de condicións que deberán facer uso do galego nos bens e nos servizos que sexan obxecto de contrato coa entidade.

Sinalización e rotulación

Os rótulos, indicadores e sinalizacións das dependencias e inmobles cuxa titularidade corresponde á Deputación Provincial da Coruña estarán en galego.

A sinalización horizontal e vertical da totalidade da Rede viaria provincial da Coruña estará redactada en galego e respectando a toponimia oficial de acordo coa lei.. Todos os vehículos do parque móbil provincial, os uniformes e outro tipo de vestimenta ou material do persoal de organismos autónomos ou outro tipo de entidades públicas e privadas dependentes da Deputación provincial da Coruña, serán rotulados en lingua galega.

O rotulado do parque móbil, o vestiario, o material e a sinalización en lingua galega por parte das empresas adxudicatarias ou concesionarias da Deputación da Coruña será esixido ou tido en conta nos pregos de condicións ou bases dos diferentes procedementos de contratación ou concesión.

A rotulación, información e sinalización ofrecida en dependencias da Deputación terá sempre como lingua principal o galego, sen prexuízo do emprego para esta finalidade doutra ou outras linguas cando o público potencial deses centros ou eventos proveña doutras áreas lingüísticas.

En calquera caso, os textos dos casos establecidos nos puntos anteriores deste artigo 13 deberán ser revisados pola UTNL da Deputación que dará o seu visto e praxe previo á súa impresión ou materialización nos correspondentes soportes.

Relacións con outras administracións

As comunicacións da Deputación Provincial da Coruña que se dirixan a calquera das administracións públicas de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia serán bilingües (galego-castelán).

As comunicacións da Deputación Provincial da Coruña dirixidas á Administración xeral e periférica, de xustiza ou militar do Estado español dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia redactaranse en lingua galega.

A documentación da Deputación Provincial da Coruña dirixida ás administracións públicas fóra do ámbito lingüístico galego redactarase en lingua galega e farase unha copia en castelán e/ou outra (s) lingua (s) que procedan, tendo en conta o ámbito lingüístico de recepción da documentación.

As copias de documentos da Deputación provincial da Coruña redactados en galego que sexan solicitados por administracións públicas fóra do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia serán tramitados en lingua galega. Achegarase con eles unha tradución á lingua ou linguas ás que legalmente proceda, tendo en conta o ámbito lingüístico de recepción dos documentos.

Con respecto aos documentos dirixidos directamente a persoas xurídicas distintas das administracións públicas, a Deputación Provincial da Coruña aterase ao previsto nas disposicións legais vixentes procurando redactalos en galego, sempre que sexa posible.

Persoal ao servizo da administración

De acordo coa legalidade vixente aplicable ao caso, o persoal ao servizo da Deputación Provincial da Coruña coñecerá e estará en condicións de empregar correctamente a lingua galega no desenvolvemento do seu traballo, tanto oralmente como escrito.

Para acadar este obxectivo establécense as seguintes regras xerais:

- a) Nos procedementos de selección de persoal incluírase unha proba de lingua galega que demostre a capacitación para o desenvolvemento do traballo neste idioma. A proba adecuarase sempre ao nivel e contido das prazas convocadas e de acordo ás funcións do posto, podendo ser oral e/ou escrita.
- b) Nos procesos selectivos incluíranse explicitamente nos cuestionarios e probas a avaliación do coñecemento da lexislación aplicable ao uso da lingua galega na Deputación da Coruña.
- c) Nos procedementos de provisión de postos de traballo, a acreditación do coñecemento da lingua galega terá, ademais, consideración de mérito puntuable co baremo que lle corresponda ás acreditacións Celga, incidindo tamén nos títulos oficiais de linguaxes específicas (administrativa, xurídica...) adecuadas ao posto.
- d) Terase en conta ao persoal da UTNL para formar parte dos tribunais, ben como membros, ben como asesores para avaliar o coñecemento do idioma galego na selección de persoal e na provisión de postos de traballo e para colaborar na creación das correspondentes bases e probas.
- e) Os cuestionarios das probas selectivas para a provisión de prazas e a contratación de persoal ao servizo da Deputación Provincial da Coruña e das entidades dela dependentes faranse en lingua galega e distribuiranse así por defecto a todas as persoas candidatas. Terase a disposición de quen o solicite con antelación copia dos cuestionarios das probas na outra lingua oficial. As probas poderán ser realizadas en calquera lingua oficial independentemente da lingua empregada no cuestionario.
- f) O persoal que actualmente traballa ao servizo da Deputación que non estea capacitado para o correcto desenvolvemento do seu traballo en lingua galega deberá adquirir tal capacidade.
- g) Para tal efecto a UTNL en colaboración con Formación e con outras administracións e entidades desenvolverá programas formativos para todo o persoal que non teña os coñecementos necesarios para exercer as súas funcións en galego poida adquirilos o antes posible.

Toponimia

En cumprimento da legalidade vixente ao respecto (artigo 10 da Lei 3/1983) de normalización a toponimia oficial é a galega. En consecuencia:

- a) A Deputación Provincial da Coruña promoverá, no ámbito das súas competencias; a recuperación, historia, orixe, coñecemento e uso da toponimia propia do territorio provincial e preservará as formas tradicionais dos nomes dos lugares.
- b) A Deputación, a través da súa UTNL velará polo uso correcto da toponimia en toda a documentación que xere e publique, tamén na publicidade que contrate e na súa presenza na Rede (internet).
- c) A Deputación demandaralle a todas as entidades beneficiarias de calquera tipo de subvención, axuda, colaboración ou contrato o correcto uso da toponimia.

Impulso institucional do idioma galego

De acordo co establecido no artigo 25 da Lei 3/1983 de normalización lingüística, a Deputación provincial da Coruña fomentará o uso do galego nas actividades mercantís publicitarias, asociativas, culturais, deportivas e calquera outro dentro do ámbito provincial.

A Deputación Provincial da Coruña poñerá paulatinamente en marcha programas dirixidos á poboación e ás entidades asociativas ou empresariais da provincia para conseguir a implicación progresiva de todos os colectivos no proceso de recuperación social da lingua galega, e fomentará – co deseño e posta en marcha dos programas oportunos- o uso e prestixio do galego na transmisión interxeracional, na mocidade, nas novas tecnoloxías, no deporte, na creación e difusión cultural, no ámbito empresarial e comercial, na comunicación, na xustiza, no lecer, na educación, na sanidade e en calquera outro ámbito social de interrelación humana.

Todos os órganos da Deputación Provincial da Coruña impulsarán a normalización lingüística no seu ámbito de actuación. A Unidade Técnica de Normalización Lingüística asesorará a Corporación provincial nesta materia.

Valorarase como criterio positivo na concesión de subvencións e axudas as iniciativas e actividades que contribúan á normalización e ao incremento do uso e prestixio da lingua galega. Do mesmo xeito, a comunicación e a produción escrita e oral (cartelaría, publicidade oral e escrita, redes sociais, etc.) a que dea lugar toda a actividade subvencionada pola Deputación Provincial da Coruña deberá estar en lingua galega. Este requisito figurará de forma expresa na convocatoria e bases correspondente.

A Deputación Provincial da Coruña de acordo coa Lei 3/1983 poderá outorgar subvencións para actuacións que procuren a normalización lingüística e o fomento da normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, culturais, asociativas, deportivas e outras por actos singulares.

Calidade lingüística e linguaxe democrática inclusiva

En todos os textos, documentos e comunicacións da Deputación Provincial da Coruña coidarase especialmente a calidade e corrección lingüística, tendo en conta que os textos emitidos desde as administracións públicas adoitan ser interpretados como modelo de lingua.

En todos os textos administrativos serán aplicados os criterios da linguaxe administrativa galega moderna, procurando sempre a súa máxima calidade, democratización, personalización, claridade dos contidos (modernización das formas, concisión e precisión, sinxeleza e ordenación) e uniformidade. Do mesmo modo, usarase unha linguaxe democrática inclusiva.

A Deputación Provincial da Coruña velará para que nos textos e comunicacións das accións doutras entidades nas que colabore, participe ou apoie, se sigan estes mesmos criterios de calidade lingüística, democrática e inclusiva.

A Unidade Técnica de Normalización Lingüística

A Unidade Técnica de Normalización Lingüística impulsará a normalización da lingua, procurará o incremento do uso e prestixio do idioma galego no ámbito provincial e coordinará as accións necesarias para darlle cumprimento a esta ordenanza.

As tarefas que desenvolva esta UTNL deben configurarse en catro áreas: dinamización sociolingüística, formación sociolingüística, asesoramento lingüístico, deseño dun programa de colaboración e axudas para a creación de Servizos de Normalización Lingüística nos concellos da provincia e outras.

As **funcións** serán:

- **Xerais:**

1. Asesorar a administración en todo o relacionado coa política lingüística.
2. Facer seguimento do cumprimento da lexislación en materia lingüística por parte da institución.
3. Informar sobre a conveniencia, oportunidade, método, etc., de incorporar accións con obxectivos normalizadores en programas ou accións da Deputación de índole diversa, e colaborar na súa especificación, deseño e materialización.
4. Emitir informes sobre a oportunidade, conveniencias, etc., de accións da Deputación con respecto ao fomento do uso e prestixio da lingua galega.
5. Colaborar coa administración para determinar os perfís lingüísticos necesarios en cada un dos postos de traballo e colaborar nas probas e procesos selectivos para que se avalíen convenientemente os coñecementos lingüísticos por parte das persoas aspirantes.

- **Dinamización sociolingüística:**

1. Fomentar o uso do galego no conxunto da sociedade.
2. Planificar, xestionar, executar e avaliar accións a prol da lingua galega seguindo as directrices de política lingüística
3. do organismo.
4. Propoñer programas dinamizadores e accións concretas que conciencien á sociedade respecto ao uso e prestixio da lingua galega, e a impliquen no proceso normalizador.
5. Propiciar e xestionar liñas de información, colaboración, coordinación e axuda dirixidas á rede asociativa, empresarial, educativa, xuvenil, etc., para fomentar o uso e prestixio do galego.

- **Formación sociolingüística:**

1. Colaborar con Formación para ofertar cursos de lingua galega, xerais e específicos, tanto para o persoal da administración como para diferentes sectores sociais.
2. Difundir materiais que contribúan á tarefa normalizadora: dereitos lingüísticos, lexislación, recursos lingüísticos, etc.
3. Colaborar no deseño de programas de formación non lingüística para garantir a presenza do galego e de contidos favorables á mellora de actitudes lingüísticas.

- **Asesoramento lingüístico:**

1. Mellorar a calidade lingüística e comunicativa da administración.
2. Normalizar a imaxe lingüística, fixar criterios lingüísticos para a organización e establecer modelos de documentos.
3. Revisar e validar lingüisticamente aqueles textos que vaian ter maior difusión, impacto ou permanencia (carteis, folletos, rotulación, anuncios, impresos, publicacións, etc.), para garantir a calidade lingüística e o uso dunha linguaxe moderna, democrática e inclusiva.
4. Resolver dúbidas lingüísticas